

DEBATE Y REALIDADES ECONOMICAS

David Ibarra
14 de noviembre de 2011
El Universal

Desde hace años, la economía mexicana ha sufrido crisis repetidas, unas cambiarias, otras bancarias y unas terceras de ambas características, además de padecer un cuasi-estancamiento ya crónico. La reducción de las tasas de desarrollo por habitante entre los periodos 1950-1980 (3% anual) y 1980-2010 (0.8%) se ha comprimido a más de dos tercios, sin visos de recomponerse. Además, en ese último lapso se registró extrema volatilidad con seis contracciones económicas importantes (1982-1983, 1986, 1995, 2001 y 2009) y descenso del producto. Los pobres resultados económicos alcanzados en las últimas tres décadas desmerecen frente a nuestra historia anterior –la de proteccionismo- y también frente a los logros recientes del grueso de los países en desarrollo, incluidos los latinoamericanos.

Llama la atención que en ese largo periodo se hubiesen concentrado las reformas más profundas, institucionales, legales y económicas desde la Revolución con el fin de subsanar las deficiencias de las estrategias previas de desarrollo y nuestra desalineación con los paradigmas del nuevo orden internacional. Por el camino de la apertura de mercados, la desregulación y las privatizaciones, se intentó alcanzar crecimientos más intensos, menores retrocesos con afianzamientos de las libertades económicas.

La explicación de la paradoja de reformas sin desarrollo, cambia según la visión ideológica que se prefiera. El conservadurismo tecnocrático sostuvo que los cambios, pese a su amplitud, quedaron truncos, incompletos, sin despejar por completo el campo a la competencia a agentes económicos individualizados que podrían haber impulsado el crecimiento y corregido posteriormente los desajustes distributivos. La bondad de los grandes equilibrios macroeconómicos –estabilidad de precios y cuentas públicas sanas- quedó deteriorada por resabios monopolistas, burocráticos e intervencionistas y, después, por inestabilidades inesperadas de la economía internacional que inhibió los efectos de la liberación de las fuerzas de los mercados.

La visión opuesta ofrece otra suerte de críticas. Sin arbitro regulador, la concurrencia irrestricta produce habitualmente concentración de riqueza e ingresos que, a la postre, desestabilizan la vida social y se contraponen con el avance de la democracia de los países. Asimismo, la competencia en mercados abiertos entre países de distinto grado de desarrollo sesga los resultados en contra de los más débiles, requiriendo de políticas estatales equilibradoras que van más allá de resguardar los llamados fundamentos macroeconómicos. En consecuencia, el Estado, lejos de ser el origen de todos los males, es actor indispensable en la vida de los países, sea como equilibrador social o como impulsor de crecimiento y empleo.

A las críticas a las políticas públicas de uno u otro signo, se suma el descontento de la sociedad civil en torno a los graves problemas actuales: la inseguridad física y económica, el resquebrajamiento de los mercados de trabajo debido al ascenso explosivo de la informalidad, del desempleo y la formación consecuente de sociedades inestables de dos velocidades, la de los excluidos y la de los grupos de élite. A lo anterior se añade el temor a que las dolorosas experiencias de los desajustes financieros mundiales con rompimiento de las burbujas especulativas privadas –de los bonos chatarra, asociados con la oleada de fusiones y adquisiciones de los años setenta; de las bolsas de valores en los ochenta; de las tecnologías de la información en los noventa o del sector inmobiliario en 2008-, se transformen en otra burbuja todavía más peligrosa, la del endeudamiento público que ya pone en riesgo a la Unión Europea y deteriora a las economías del Primer Mundo.

Ya es contraproducente seguir atrapados en el mismo debate de mercado *versus* Estado, cuando el mundo se estremece por dificultades de nuevo cuño que se añaden a otras más viejas, no resueltas. La edificación del futuro exige aprender de los equívocos del pasado y del presente. Si la historia tiene utilidad habrá que precaverse de los abusos del endeudamiento, de la inflación y del gasto público para sostener artificiosamente crecimientos altos, sin importar el costo. En el mismo tenor, hoy, habría que limitar el uso de la depreciación de los salarios, la sobrevaluación cambiaria, la elevación de las tasas activas de interés, el racionamiento del crédito y al gasto público, como armas legítimas de combate

a riesgos inflacionarios internos –ya casi inexistentes- o a los desequilibrios de la balanza de pagos por la vía de contener importaciones y crecimiento.

Frente a la incertidumbre y los contagios derivados de la inestabilidad económica internacional y los magros resultados internos, habrá que buscar la manera de ganar autonomía mínima en el desarrollo y, a la vez, crear o fortalecer nexos con los países que vayan consolidándose, como motores de la producción y las finanzas mundiales.

Esas premisas obligan a descartar por lo menos parte de los dictados de paradigmas económicos universales que han quedado obsoletos o que han dejado de observarse aún en los mismos países desarrollados donde se originaron, entre otras razones, por sus fallas de concepción puestas de manifiesto en la frustrada búsqueda de salidas a la crisis. El intervencionismo de los estados y de los bancos centrales, hasta hace poco anatema infranqueable ha dejado de serlo. De la misma manera se multiplican medidas de corte proteccionista directo o indirecto, reflejadas en alguna medida en las fuertes oscilaciones de los tipos de cambio. De su lado, los países en desarrollo más exitosos en las últimas décadas no dejaron de ser intervencionistas, han sostenido políticas industriales inequívocas y reservado el manejo de sus sistemas de pagos –bancos, instituciones financieras- a la propiedad y control nacionales.

El objetivo casi universal de la estabilidad de precios -en tanto condición a la normalidad del comercio global- cede terreno o se combina más y más con ingredientes decididamente contracíclicos y desarrollistas. Cobrar autonomía y superar la crisis, demanda recuperar la primacía del crecimiento, del empleo, en el diseño de las políticas económicas. En el caso de México, ello conduciría a instrumentar una reforma fiscal que gradualmente liberase de restricciones exageradas, nocivas, a la inversión pública y a la atención de los nuevos y viejos riesgos sociales; a la implantación de una política monetaria y cambiaria que rompa el estrangulamiento del crédito a la producción, evite la perniciosa sobrevaluación del tipo de cambio y limite los movimientos especulativos del mercado internacional de capitales. Las estrategias de relacionamiento externo, en vez de centrarse casi unilateralmente en tratados pasivos de libre comercio, debieran apoyarse en el desarrollo deliberado de ventajas comparativas y

negociaciones sistemáticas para insertar a nuestros productores en las cadenas transnacionales de mayor valor agregado, con el respaldo técnico y financiero en términos competitivos a los exportadores nacionales.

A la vez, habría que buscar la estabilización de los mercados de trabajo, como una de las tareas principales de la política macroeconómica debido a sus vitales conexiones con la eficacia de las políticas y el logro de los grandes equilibrios sociales. Todo lo anterior, quedaría incompleto, cojo, en ausencia de una política industrial que diese orientación a las políticas contracíclicas de corto plazo y a las estrategias de desarrollo de más amplio término. Apremia enriquecer el debate político y traducirlo en reformas y acciones concretas. De otra suerte, los costos de seguir en un mundo inseguro, estancado, dividido, ya son demasiado altos para resultar socialmente tolerables.